

La Sociedad Excluyente

M. Svampa

Alfaguara - Taurus, 2005

CLASES 9 y 10

CAPÍTULO 7

CRISIS ESTRUCTURAL Y NUEVAS FORMAS DE RESISTENCIA

Al igual que el clientelismo, el largo arraigo de los vínculos corporatistas entre sindicatos en México y en la Argentina jugó un papel instrumental en la implementación de las reformas, mostrando que los sindicatos no sólo movilizan sino que también desmovilizan y que, en ausencia de su colaboración, las tareas de la transformación económica son potencialmente más arduas.

Juan Carlos Torre,
El proceso político de las reformas económicas en América Latina.

DIMENSIONES Y EXPRESIONES DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Durante dos siglos, la historia de las luchas y formas de resistencia colectiva estuvieron asociadas a las estructuras organizativas de la clase obrera, considerada ésta como el actor privilegiado del cambio histórico. De manera más precisa, la acción organizada de la clase obrera era conceptualizada en términos de "movimiento social", en la medida en que ésta aparecía como la expresión privilegiada de una nueva alternativa social, diferente del modelo capitalista vigente. Sin embargo, la pérdida de centralidad del conflicto industrial y la multiplicación de las esferas de conflicto pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar las definiciones y las categorías analíticas.

Para dar cuenta de esos cambios, se instituyó la categoría —a la vez empírica y teórica— de "nuevos movimientos sociales", a fin de caracterizar la acción de los movimientos feminista, ecologista, estudiantil y pacifista, entre los más importantes. Estos movimientos resultaban ser novedosos respecto del movimiento obrero clásico en varios sentidos. Por un lado, expresaban una nueva politización de la sociedad, a través de la puesta en público de temáticas y conflictos que tradicionalmente se habían considerado como propios del ámbito privado (la democratización de la relación entre géneros, el respeto de la diferencia, del medio ambiente, el rechazo del modelo discipli-

nario ligado a la sociedad industrial, entre otros). Por otro lado, estos movimientos aparecían como portadores de nuevas prácticas, orientadas al desarrollo de formas organizativas más flexibles y democráticas, que cuestionaban fuertemente tanto los estilos de construcción política de la socialdemocracia (y sus poderosos sindicatos), como los procedentes del modelo leninista (el centralismo democrático), asociado a los partidos de izquierda. Por último, a diferencia del movimiento obrero tradicional, las formas de acción colectiva emergentes tenían una base social policlasista, con una importante presencia de las nuevas clases medias. Para algunos, éste era uno de los elementos centrales que explicaban la autolimitación de los nuevos movimientos sociales, cuyos objetivos apuntaban menos a la toma del poder que al fortalecimiento de la sociedad civil y a la creación de esferas de contrapoder.

En función de estos cambios, no fueron pocos los autores que se embarcaron en la tarea de desarrollar nuevas conceptualizaciones y paradigmas, subrayando el carácter plural de las luchas sociales y culturales y cuestionando la perspectiva historicista y esencialista de la matriz marxista, que concluía tanto en la inevitable centralidad de la clase obrera como en una supuesta predeterminación de los sujetos desde lo social.

Ahora bien, como hemos dicho, en América Latina el referente empírico del movimiento social histórico no fue propiamente hablando la clase obrera, sino más bien "las clases populares", en plural, y en un sentido amplio. En efecto, recordemos que en estas latitudes históricamente lo popular ha designado, desde el principio, un conglomerado que reúne mundos heterogéneos, entre los que se cuentan indígenas, campesinos, trabajadores informales y clase obrera urbana. Por ello mismo, la acción colectiva ha estado marcada desde el inicio por una multiplicidad de dimensiones y llamados, en nombre de la clase, la nación y el antiimperialismo, sin que ninguno de ellos lograra un primado estructural sobre los otros. Ya hemos dicho que tocaría al populismo dar expresión política a esta abigarrada realidad popular, a través de la noción unificadora de pueblo, concepto que designaba tanto un sujeto colectivo imaginario homogéneo, como un sector social real heterogéneo. El modelo nacional-popular apuntaría también a la homogeneización de los sujetos sociales,

mediante la inclusión simbólica de los bordes o márgenes de la nación, como lo ilustra el indígena, incorporado al lenguaje populista como "campesino" (Gilly:1997). Sin embargo, para una gran parte del pensamiento social, el problema mayor, esto es, la construcción de un sujeto histórico, aludía tanto a la heterogeneidad social como a la falta de autonomía del movimiento sindical, frente al llamado político del líder desde el aparato del Estado.

Fue entre los años 70 y 80 cuando en gran parte de América Latina se llevó a cabo el pasaje de la movilización del "pueblo" a los "nuevos movimientos sociales", visible en un conjunto de acciones colectivas, marcadas por su carácter local y puntual. En el espacio urbano, la época estaría recorrida por la emergencia de nuevas luchas, ligadas a las condiciones de vida y, por ende, al reclamo de la tierra y la vivienda y de los servicios públicos. En este sentido, los llamados "movimientos sociales urbanos" venían a poner de manifiesto los límites del proyecto de modernización nacional-popular, visibles en la pauperización económica y marginalidad urbana de amplios sectores populares. En todo caso, el proceso daba cuenta del nacimiento de una nueva matriz de acción territorial, con componentes altamente pragmáticos y una fuerte orientación de demandas hacia el Estado.²

En la Argentina, esta situación aparecía ilustrada tanto por los movimientos vecinales (González Bombal:1988), de corte municipalista (vinculados a los aumentos de los impuestos, desarrollados al final de la última dictadura militar), como por los movimientos de reivindicación de la tierra y la vivienda (movimiento villero, asentamientos). Fueron muy especialmente estos últimos los que encontraron un fuerte impulso durante los años 80, a partir de las tomas de tierras, en su mayor parte en las zonas marginales, privadas de servicios públicos. Muchas de estas tomas fueron cuidadosamente planificadas y contaron con el apoyo y participación de diferentes actores sociales (ONG, comunidades eclesiales, militantes políticos). Más aún, como afirma Denis Merklen (2001), en sus años fundacionales, el imaginario de los nuevos pobladores contenía fuertes referencias a la noción de ciudadanía e integración social, tal como aparecía ejemplificado por el trazado urbano (propio de un barrio), que buscaba diferenciar el asentamiento de la "villa", figura de la segregación socioespacial fuertemente estigmatizada.

Por último, la acción colectiva registró nuevas inflexiones a partir del desarrollo de las organizaciones de derechos humanos (Jelin:1989). Estos movimientos fueron portadores de nuevas demandas de justicia, centradas en las denuncias de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. Con los años, su productividad se haría visible tanto en la ampliación de la plataforma de demandas como en la consolidación de un campo multiorganizacional (con diferentes grados de institucionalización).

En todo caso, tanto los movimientos sociales urbanos como los de derechos humanos mostraban un claro contraste en relación con el movimiento sindical tradicional, en la medida en que colocaban al Estado en el centro de los reclamos: sea como garante de los derechos básicos (a la tierra, a la vivienda, a los servicios públicos), o como responsable de la privación de los derechos cívicos (violación de los derechos humanos y desaparición de personas, por parte de un Estado terrorista). Asimismo, en ambos movimientos se destacaba el fuerte compromiso de las mujeres, aun si inicialmente la intervención pública de éstas no provenía de convencimientos ideológicos previos, ni de cálculos estratégicos respecto de la dictadura militar ni de una apuesta feminista (Jelin:1996, pp. 200-201).

Es necesario aclarar que estos movimientos coexistían con las organizaciones sindicales, muchas de las cuales habían sufrido una feroz represión durante los movilizadros años 70 (un alto porcentaje de los detenidos-desaparecidos provenían de las expresiones más combativas del medio sindical). Ahora bien, el movimiento sindical argentino, tradicionalmente peronista, cuyas luchas daban cuenta de una amalgama particularmente compleja entre la resistencia y la integración (James:1990), sufriría cambios notorios en los años de la democracia, visibles en la pérdida de representatividad y su creciente descrédito frente a los ojos de la sociedad.

En realidad, la Argentina de los años 90, época en la cual se confirma el pasaje a un nuevo tipo de sociedad, evoca la imagen de un país atravesado por una multiplicidad de acciones colectivas, en fin, un escenario político y social donde la categoría "pueblo" continuaba resonando tanto como la de "nuevos movimientos sociales". Sin embargo, como en otras latitudes,

los grandes cambios estructurales impactaron en los repertorios tradicionales de acción colectiva, poniendo en entredicho las dos figuras recurrentes de lo popular: "el pueblo" y "los nuevos movimientos sociales".

Este proceso de mutación estructural tuvo también su correlato teórico-conceptual, en tanto puso en evidencia la insuficiencia de ciertos paradigmas y categorías de análisis de la acción colectiva. Así, a mediados de los 90, mientras que desde el campo de la Historia asomaría el concepto pretendidamente neutro de "sectores populares" (Gutiérrez y Romero:1995), indicando con ello que lo popular devenía cada vez más una situación, definida por la precariedad, antes que un actor social; por su parte, desde el campo de la Sociología y la Ciencia Política, los análisis apelarían cada vez más a la noción de "protesta", para dar cuenta del carácter evanescente, puntual y focalizado de las acciones, poco articuladas entre sí, cuya ilustración paradigmática sería el "santiagueñazo" (1993).³

LAS DECLINACIONES DEL SINDICALISMO PERONISTA

Entre 1989 y 1995 se desarrolla un ciclo de acciones protagonizadas por los empleados públicos, los docentes y los jubilados, todos ellos actores perjudicados por la política de ajuste estructural. Pese a haber sido lideradas por el actor sindical, estas acciones se realizaron por fuera de la CGT. Es cierto que, en ese período, la realidad misma del sindicalismo mutó considerablemente. En efecto, el giro liberal del gobierno de Carlos Menem y el colapso del antiguo modelo, produjeron importantes cambios en el mundo sindical tradicionalmente peronista. Sorprendidos por la política de alianzas del Partido Justicialista, afectados por problemas de representatividad que, sin constituir una especificidad nacional, potenciaban aun más la crisis, pocos sindicatos se encontrarían en condiciones para enfrentar la ofensiva empresarial y las consecuencias de la flexibilización laboral. Además, a diferencia de épocas recientes, dentro del peronismo, el proceso en marcha marcaba la fuerte hegemonía de las estructuras partidarias por sobre las estructuras sindicales, confirmando —una vez más— que el tipo

de vínculo populista se asentaba sobre la clara subordinación de los actores sindicales al líder político. En fin, como afirma Torre (1998, pp. 82-83), las reformas estructurales y el nuevo estilo decisorio produjeron un efecto desmovilizador, sobre todo en aquellos intereses cuya voz se había construido desde el Estado, antes que desde "el *ethos* organizacional" propio de las luchas sociales.

Como consecuencia de ello, el espacio de acción sindical se redujo notablemente. Así, la expansión de nuevas formas de contratación precarias e inestables, la tercerización de servicios, el cuestionamiento de las formas de negociación colectiva y su reemplazo por los acuerdos individuales y por empresa, los aumentos por productividad, en fin, los cambios implicados por la irrupción de nuevas formas de gestión y organización del trabajo repercutieron profundamente en las formas de representación sindical. El proceso de adaptación y, por ende, las negociaciones, se realizaron entonces en un contexto de desestructuración del escenario laboral y de ruptura de las lealtades sindicales.

En este escenario se fueron perfilando los nuevos alineamientos sindicales. Siguiendo a Albert Hirschman (1992), podemos decir que, en primer lugar, fue erigiéndose un poderoso bloque representado por los voceros de la *lealtad*, encarnado por la CGT, bajo la conducción de Alberto Cassia, Gerardo Martínez y Rodolfo Daer, sucesivamente. Allí estaban los gremios que apoyaron las reformas encaradas por el gobierno, aunque con diversos grados de acatamiento y diferentes estrategias de adaptación.⁴ Estos sindicatos cubrirían un amplio arco que iba desde los exitosos portavoces del "nuevo sindicalismo" empresarial, hasta los partidarios de una "vinculación orgánica" con el partido en el poder.

Siguiendo a Palomino (2005), es necesario recordar que a cambio del apoyo al gobierno y sus políticas neoliberales, la CGT obtuvo la confirmación de una buena parte de sus prerrogativas corporativas, a saber: la afirmación del monopolio de la representación sindical, basada en la personería gremial; el control de los fondos de obras sociales; el mantenimiento de su rol en las negociaciones colectivas (cuando éstas se llevaban a cabo); la participación en las listas partidarias del PJ

(sobre todo en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, donde la mayoría de los legisladores son de extracción sindical). Por otro lado, algunos sindicatos de la CGT pudieron intervenir activamente en el campo empresarial, a través de las privatizaciones de las empresas públicas la reforma previsional y las reformas del seguro de los accidentes de trabajo. Entre los beneficiados por estas reformas estuvieron el Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE), la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

En segundo lugar, encontramos el ala disidente de la CGT oficial, el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos), encabezado por el jefe de los camioneros, Hugo Moyano. Allí estaban los que, cada tanto, hacían escuchar su voz, y pugnaban, en último análisis, por revivir el modelo sindical asociado a una política sustitutiva de importaciones y a un Estado fuerte. Pese a protagonizar una serie de movilizaciones y medidas contestatarias junto con la CTA y la CCC, el MTA nunca rompió definitivamente con la Confederación General de Trabajadores (CGT) —aun si adoptó durante un período el nombre de "CGT disidente"— y menos aún con el Partido Justicialista. En realidad, este segundo alineamiento ponía de manifiesto el colapso del modelo nacional-popular y, al mismo tiempo, su defensa y su nostalgia. Un discurso que no vacilaría en hacer la crítica al nuevo modelo (colocándose, en ese sentido, en una posición antineoliberal), aunque sin abandonar la demanda de "unidad sindical" ni mucho menos la disciplina partidaria. Finalmente, este sector disidente pasó a liderar la CGT, a partir de su reunificación en 2003, bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

La crisis del sindicalismo tradicional puede ser ilustrada a través de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sindicato que fuera la encarnación más acabada del régimen anterior de relaciones laborales, tanto en términos de estándares salariales, como de legado político y organizativo. Sin embargo, durante los 90, la imagen de la "Patria Metalúrgica" pareció estallar en mil pedazos. Por un lado, tengamos en cuenta que, dentro del sector industrial, la UOM es un sindicato que tradicionalmente agrupa

numerosas ramas y actividades, desde la siderurgia (que sufriría los efectos de la privatización), el sector metalmecánico (sobre todo, el automotor, que tuvo momentos de expansión), hasta la industria liviana ligada al mercado interno (sumamente afectada por la apertura de las importaciones). En consecuencia, la crisis en la UOM no sólo estaba relacionada con la centralidad que el gremio tuvo en otras etapas, sino con la heterogeneidad de las actividades que abarcaba. Por otro lado, dicha crisis expresaba de manera paradigmática la convergencia negativa de una serie de transformaciones mayores: mientras que la dinámica de desindustrialización erosionaba de manera radical sus bases de apoyo, los cambios implicaban una drástica modificación del modelo de relaciones laborales, acompañados también por la introducción de nuevas formas de organización del trabajo.

Ahora bien, pese a que posee la estructura de la "unión" —una de las formas de organización piramidal más jerárquicas y centralizadas—, la UOM está compuesta por seccionales que trabajan con escasa coordinación entre sí. No olvidemos que la subordinación de los sindicatos a un nuevo paradigma organizacional se tradujo en nuevas estrategias de disciplinamiento. Mientras que la Ley Nacional de Empleo estableció contratos flexibles y temporarios que limitaron mucho la estabilidad laboral, el decreto de desregulación de la economía de 1991 impulsó la firma de convenios por empresa y apuntó por ende a descentralizar la negociación colectiva, organizada por sector o rama de actividad. Así las cosas, la UOM, que tradicionalmente alentó un discurso de defensa de la unidad sindical, por medio de la centralización de la acción y de la negociación colectiva, emergió pues como uno de los gremios más damnificados por este proceso. En resumen, a las dificultades provocadas por la desregulación creciente del sistema de relaciones laborales, agravadas por los no menos importantes cambios tecnológicos y organizativos (traducidos en un cambio en la "cultura laboral"), hay que agregar las consecuencias del proceso de desindustrialización (cierre masivo de empresas), así como los efectos de la privatización y reestructuración de un sector representado por el gremio: la siderurgia, a través de SOMISA.

Por último, en términos políticos, la UOM se encontró, como pocos sindicatos, fuertemente atravesada por los nuevos dilemas a los cuales la confrontaba el peronismo. Pese a ello,

en sintonía con el MTA, mantuvo una posición más bien compedora, sin desligarse de la CGT (durante años ocupó en ella la Secretaría de Relaciones Internacionales⁵), encabezando, en determinados períodos, una suerte de "comisión de enlace" entre las distintas organizaciones pertenecientes al campo antineoliberal.

A lo largo de los 90, más allá de la figura de la lealtad y la disciplina partidaria, la evolución de la UOM nos advierte sobre la presencia de conductas diferentes, nada unívocas, que dieron como resultado grados importantes de variación, en función del legado organizacional de cada seccional, así como de la rama de actividad correspondiente. Ciertamente es que en muy pocos casos se eligió "la salida", como sucedió con la UOM de Villa Constitución, que decidió acompañar la experiencia de la CTA. También es cierto que hubo claras declinaciones por parte de sectores considerados hasta hacía poco tiempo combativos, aunque en muchos casos el escenario permaneció inmodificado, dada la reproducción de las prácticas burocráticas y los estilos mafiosos. Pero entre los que decidieron quedarse, hubo ciertos sectores y seccionales que continuaron desarrollando un particular empeño en defensa del estatuto salarial, vinculado al "obrero metalúrgico".⁶

Pese a ello, hay que aclarar que allí donde hubo resistencia y crítica a los nuevos estándares laborales, ésta encontró límites claros, como lo testimonia de manera ejemplar el conflicto entablado entre la UOM y el SMATA, en 1996, a propósito de la representación de los obreros de la Fiat. Para entender este conflicto, es necesario aclarar que la UOM representaba a una parte importante del sector automotor, que, beneficiado por una política de promoción y exenciones, conoció una cierta expansión a mediados de los 90. Pero, mientras que la UOM apuntaba a firmar convenios "marco", que incluían toda la rama o sector, SMATA realizaba acuerdos por empresas, lo cual lo colocaba en mayor sintonía con los nuevos tiempos. Estos límites saltaron a la luz a raíz del conflicto que enfrentó a la UOM con SMATA, por la representación de los trabajadores de Fiat.

Recordemos brevemente los hechos. En 1995, Fiat, en ese entonces la quinta empresa automotriz del mundo, decidió reinstalarse y reconstruir su emporio industrial en el país. Para

ello inició negociaciones con la UOM, a fin de firmar el convenio colectivo que regiría a los operarios de la planta proyectada en Córdoba, que prometía la creación de 5000 puestos de trabajo. Tras ocho meses de negociaciones, ambas partes llegaron a un preacuerdo, que en el caso de la UOM quedó a consideración de la estructura jerárquica de la organización, la que determinó que se intentara renegociar algunas cláusulas sobre condiciones de trabajo y escala salarial. Sin embargo, frente a la intransigencia de la UOM, que en enero de 1996 planteó revisar esas cláusulas, Fiat buscó nuevos interlocutores, y una semana después firmó un convenio con SMATA, el cual se constituyó en un modelo de flexibilidad laboral. Dicho convenio no sólo fue rápidamente homologado por el Ministerio de Trabajo, sino que tuvo un "efecto de arrastre" en otras empresas automotrices que buscaban instalarse en el país (Toyota y Chrysler), que lograron firmar convenios aun más flexibles que sus competidoras, garantizando así entre un 30 y 40% de reducción de los costos laborales, además de disminuir la representación sindical en las empresas.⁷

En fin, aun en sus sectores más resistentes, la experiencia de la UOM se vio atrapada entre dos actitudes: en términos gremiales, como señalan Raúl Bisio y Ada Freytes Frey, la adecuación o "sinceramiento" de la UOM a las nuevas relaciones laborales terminó por darse en el marco de las negociaciones realizadas en el nivel de empresa, que dispusieron la introducción de innovaciones organizativas y la reducción del número de categorías socio-profesionales, a cambio de contrapartidas salariales —vía adicionales o recategorización de puestos—. (Bisio y Freytes Frey:1997, pp. 184-185). En términos políticos, si bien rechazó su evolución hacia otros modelos de representación sindical, así como evitó asumir el riesgo de una oposición abierta, el gremio nunca renunció a las determinaciones centrales de su identidad política (peronista). Así las cosas, sus oscilaciones políticas, producto de la necesidad de adecuar identidad peronista y conciencia gremial, buscaron no desbordar los límites impuestos por la disciplina partidaria. En todo caso, esto dejaba en claro que la UOM, al igual que sus pares del MTA, depositaba las perspectivas de transformación más en un posible cambio político en la dirección del gobierno, que en la posibilidad

de un reequilibrio de fuerzas a través de las luchas sociales. Para muchos de ellos, esa posibilidad finalmente se abriría en 2003, con la asunción de Kirchner.

DE LOS AVATARES DE LA RESISTENCIA SINDICAL A LOS ESTALLIDOS SOCIALES

El giro neoliberal arrojó a vastos sectores del sindicalismo hacia el costado de los nuevos "perdedores", sobre todo, aquellos cuya base de sustentación social se encontraban en los sectores público e industrial. Sin embargo, la dinámica destructiva de la modernización excluyente alcanzó a diferentes categorías sociales, entre las cuales se encontraban trabajadores industriales, empleados públicos nacionales y provinciales y docentes de los diferentes niveles de enseñanza, como también comerciantes, pequeños productores y empresarios locales de todo el país.

Cierto es que la resistencia tendió a concentrarse en los sindicatos cuya base eran los empleados públicos, quienes pese a sufrir severamente el deterioro de sus condiciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo y las consecuencias desorganizativas de la descentralización administrativa, pudieron contar con un núcleo estable de trabajadores. Sin embargo, la movilización no fue el resultado mecánico de un cambio en las condiciones objetivas. Por el contrario, los hechos indican que las transformaciones estructurales fueron procesadas de manera diferente y en tiempos distintos según las regiones. Pero además de ello, la importancia de las variables políticas y los alineamientos ideológicos no pueden ser desestimados, tal como lo muestra el caso de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), gremio que permaneció dentro de la CGT y desarrolló en el nivel nacional una estrategia desmovilizadora, contrapuesta a la posición confrontativa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Ahora bien, durante los primeros años del régimen menemista, los conflictos se manifestaron en el nivel local y regional, de manera puntual y dispersa, revelando una escasa articulación entre ellos. En realidad, como hemos analizado en otro texto (Svampa y Pereyra:2003), esta diseminación y asincronía

de los conflictos era consecuencia del proceso de descentralización administrativa, pues éste abrió un espacio entre la política nacional y la política provincial marcado por las diferentes temporalidades así como por las múltiples instancias de negociación, que permitieron tal dispersión al tiempo que dificultaron que se desarrollara una estrategia global de confrontación con el modelo económico.⁸ De esta manera, los conflictos se expresaron en acciones evanescentes, aisladas, "estallidos sociales"; ciclos de movilización que parecían no venir de ningún lado y que, pese a su intensidad, al día siguiente eran reabsorbidos sin haber producido aparentes "cambios de rumbo" (Svampa y Pereyra:2003, pp. 26-31). Estos "estallidos sociales" que se sucedieron en diferentes provincias tenían como trasfondo la acción sindical de ATE y otros sindicatos opositores (entre los que estaban aquellos que compondrían la CCC), pero también revelaban un fuerte anclaje comunitario. Éste es el caso de las acciones que encabezaron los empleados públicos en diferentes provincias (Río Negro, San Juan, Córdoba, Jujuy, entre otras), y que tuvo su máxima expresión en el "santiagueñazo" (1993), aquel "día de furia" de los empleados estatales, a quienes el Estado provincial adeudaba varios meses de salario, y que terminó con la quema de las tres sedes del poder y la persecución de los "políticos corruptos" (Farinetti:2000). Este episodio marca una inflexión importante en las formas de acción colectiva en la Argentina contemporánea: ocurrido durante el primer período presidencial de Carlos Menem, en una provincia que presenta fuertes estructuras jerárquicas y tradicionales y una asentada matriz clientelar, el "santiagueñazo" es el antecedente más importante en la historia del progresivo y profundo distanciamiento entre el sistema político y la sociedad, que caracteriza los avatares de la política argentina de las últimas décadas.

Además de las asincronías y diferentes temporalidades de las movilizaciones en las provincias, la estrategia de confrontación sindical se encontró con otros escollos. Por ejemplo, la política de privatización, sobre todo, durante la primera fase de reforma del Estado, ilustrada por aquellos sindicatos que opusieron resistencia, como fue el caso de los trabajadores telefónicos de Entel (que realizaron un paro de 16 días, en 1990), o el gremio de los trabajadores ferroviarios. En realidad, las dife-

rentes estrategias de oposición sindical se estrellaron contra una férrea voluntad de disciplinamiento, por parte de un gobierno que rápidamente asoció su supervivencia a la aplicación del programa de reformas estructurales. En este sentido, hay que recordar que la aplicación drástica de la política gubernamental fue facilitada por la existencia de una suerte de proto-consenso neoliberal, que se había instalado en vastos sectores de la sociedad. Como hemos dicho, este discurso crítico no sólo apuntaba a subrayar el déficit astronómico de las empresas estatales, sino las "consecuencias perversas" del modelo estadocéntrico visible en las deformaciones de un Estado "elefantiásico", así como en la consolidación de un estereotipo negativo del empleado público, muy difundido en la época. Como recuerdan particularmente los ex empleados de YPF en Neuquén o Tartagal, las marchas y protestas que ellos realizaron a comienzos de los 90 en contra de la privatización no fueron acompañadas por la población, que, por lo general, no vio en ellas sino el reflejo de intereses corporativos, y en casos como el de los trabajadores petroleros, el reclamo de un sector privilegiado dentro del Estado.

Dos conflictos mantuvieron una relevancia nacional durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem; el de los empleados públicos, afectados por el proceso de descentralización administrativa y el congelamiento de la carrera pública, y el de los jubilados, perjudicados por la política de ajuste y la reforma provisional. Pero ni uno ni otro tuvieron gran impacto en las provincias, donde la reforma de la administración pública provincial se postergó hasta 1995.⁹ Recordemos que, en el marco de la política de descentralización, las escuelas secundarias pasaron a depender de la órbita de las provincias en 1991 (Ley de Transferencia de los Servicios Educativos). Por su parte las escuelas primarias ya dependían de las provincias, desde las reformas introducidas por la última dictadura militar. En consecuencia, solamente el sistema educativo universitario quedó dentro de la órbita del Ministerio de Educación nacional, caracterizado en este sentido como un "ministerio sin escuelas".¹⁰ En realidad, que recién hacia 1997 cuando la protesta de los maestros se tornó visible en el nivel nacional, con la instalación de la "Carpa Blanca" frente al Congreso de la Nación, en de-

manda de una ley de financiamiento educativo. Esta novedosa forma de protesta apuntaba sin duda a la articulación de una propuesta más general, ligada a la defensa de la educación como un "derecho cívico". Pese a las simpatías y acompañamiento con que contó, luego de un largo período (casi dos años) de desgaste y cuasibanalización, la protesta tuvo una resolución poco afortunada, en la cual desempeñó sin duda un papel importante el contexto de expectativa y apoyo que el propio gremio de docentes (Ctera) había depositado en el nuevo gobierno, de la Alianza (1999). Sin embargo, los conflictos sociales ligados al sector docente se fueron expandiendo hacia el final del período de la convertibilidad, momento en el cual se sumarían las universidades nacionales, que protagonizaron movilizaciones masivas, ante la embestida del efímero ministro de Economía Ricardo López Murphy, quien había anunciado un recorte importante del presupuesto educativo. Frente a ello, el declinante gobierno de Fernando De la Rúa retrocedió en su propuesta y optó por reemplazar al ministro, trayendo nuevamente al centro de la escena al llamado "autor del modelo", el economista y político neoliberal Domingo Cavallo.

HACIA UNA NUEVA ALTERNATIVA SINDICAL: LA CTA

Volviendo a los inicios del régimen menemista, es necesario tener en cuenta que, pese a la escasa articulación entre las protestas, el proceso de resistencia no tardó en desembocar en el surgimiento de otras alternativas sindicales, como es el caso de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Ambas organizaciones encabezaron la oposición sindical al modelo neoliberal, mediante una estrategia de confrontación que contemplaba tanto la multiplicación de los tipos de protesta (marchas federales, cortes de ruta, peticiones), como la constitución de amplias multisectoriales que nucleaban a diferentes sectores sociales perjudicados por las reformas estructurales (Federación Agraria, Apyme). No por casualidad esta búsqueda de articulación desembocaría, a partir de 1996-97, en la organización de los incipientes

movimientos territoriales de desocupados, proceso que estas dos organizaciones lideraron junto con sectores independientes de la izquierda.

En este escenario, en el cual convergían consenso neoliberal en germen con el compromiso y lealtad de la CGT para con el gobierno peronista y la escasa capacidad de interpelación de los sindicatos que se opusieron a la implementación del modelo, se fue insertando la apuesta de la CTA de construir una nueva central sindical autónoma y alternativa, pluralista y no partidaria. El desafío, hay que decirlo, se enfrentaba a numerosas dificultades, pues en la Argentina, el espacio para desarrollar una acción sindical autónoma situada más allá de la subordinación al sistema político o de la acción corporativa ha sido siempre muy reducido. Así, las corrientes del sindicalismo clasista, que hacia fines de los años 60 lograron arraigarse en diferentes sindicatos industriales y estatales, tropezaron en distintos períodos con los problemas de la identidad política y la vigencia de los modelos sindicales impuestos a partir del peronismo (Torre:1989, Svampa:2003a). Sin embargo, apelando a la autonomía sindical y a la democracia de base, la CTA apuntó a redefinir su perfil institucional, lo cual suponía, desde el comienzo, la tarea nada fácil de construir una identidad sindical disociada de la identidad partidaria (justicialista), siendo que una gran parte de sus dirigentes proviene de la matriz peronista. El proyecto, encabezado por Víctor De Gennaro, nuclea principalmente al gremio de ATE y a Ctera (docentes), a los que hay que sumar otros sindicatos, como la UOM de Villa Constitución y el gremio de empleados judiciales.

Aunque comienza a perfilarse en 1991, en rigor la CTA nace en 1992 y se conforma como central sindical en 1997. En ese lapso, la CTA recorrió un largo camino, jalonado por diferentes acciones reivindicativas que abarcaron desde la lucha por el millón de firmas en contra de la jubilación privada, la Marcha Federal del 6 de julio de 1994,¹¹ varios paros nacionales, realizados con la CCC y, en algunos casos, con el MTA. En 1997, la CTA acompañó la protesta docente de la Carpa Blanca; más tarde desempeñó un rol protagónico en la conformación del Frenapo (Frente Nacional contra la Pobreza) y en la realización de la consulta popular por la instalación de un seguro de empleo

y formación para los jefes de familia desocupados que se haría en 2001. En diciembre de 2002, lanzó un llamado a la creación de un movimiento político-social. En fin, actualmente, según declaraciones de su secretario general, la CTA posee más de 1.300.000 afiliados y acoge más de 2000 organizaciones en su seno (*La Nación*, 2/4/2005).

En realidad, desde varios puntos de vista, la CTA se ha convertido en una organización sindical de nuevo tipo. Así, aunque en términos organizativos es una instancia de tercer grado (esto es, una central que nuclea sindicatos del sector —organizaciones de segundo grado—, los que a su vez incorporan organizaciones de primer grado o de base), su estatuto, a diferencia de la CGT o de otras centrales sindicales —como la CUT brasileña—, permite la incorporación de organizaciones de primer grado. Las autoridades son elegidas por el voto directo de los afiliados.¹² Dicha propuesta se halla en consonancia con la estrategia multisectorial que la CTA ha propiciado desde sus comienzos: hacia afuera, esto le ha permitido articular acciones con diferentes actores, por medio de la conformación de frentes gremiales —con la CCC— y/o multisectoriales, con sectores que van desde la Federación Agraria Argentina hasta la Apyme (Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas), o, en ciertos casos, como a través del Frenapo, con algunos partidos políticos. Hacia adentro, la estrategia hizo posible la expansión de su plataforma de representación, al incluir en su seno desde organizaciones de base ligadas a pequeños propietarios rurales y organizaciones de inquilinos, hasta trabajadores desocupados.

En esta dirección, hay que señalar que la CTA estuvo entre las primeras organizaciones que percibió la potencialidad organizativa de los desocupados. Esta estrategia se diferencia netamente de las posiciones respecto de los desocupados adoptadas por ciertos partidos de izquierda, cuya visión organizativa y política está más anclada en las representaciones del mundo industrial. Contrariamente a ello, la CTA percibió tempranamente el proceso de inscripción territorial de las clases populares, como aparece resumido en la consigna “La nueva fábrica es el barrio”. Ya en el congreso celebrado en 1996, cuando adoptaron el nombre de Central de los Trabajadores Argentinos, sus dirigentes definieron a la desocupación “como el pro-

blema principal de la crisis social argentina” (Armellino:2005, p. 10). Los primeros intentos organizativos de “sindicalizar” al sector, mediante encuentros y congresos de desocupados, tuvieron lugar en Neuquén, en 1996, poco antes de los hechos de Cutral-Co, y en La Matanza, en 1997. Finalmente, esta búsqueda daría sus frutos en 1998, con la creación de la Federación de Tierras y Viviendas (FTV), una amalgama bastante heterogénea de agrupaciones de base muy diversas, que reúne organizaciones campesinas, comunidades indígenas, trabajadores y desocupados de asentamientos y movimientos de inquilinos, entre otros.¹³

Así, desde el comienzo, el objetivo de la CTA ha sido el de construir un movimiento social y político, como herramienta para el cambio social. Por ello mismo, la idea de crear multisectoriales es, antes que nada, una apuesta de orden estratégico, que se propone a la vez como una “alternativa sindical diferente”, y como una “nueva construcción política”. En realidad, para muchos de sus dirigentes, ambas propuestas son indisociables, pues la primera es la condición de posibilidad de la segunda, que a su vez es un requisito para el éxito de la primera.

Por otro lado, el trabajo de articulación multisectorial ha sido acompañado por la elaboración de una propuesta social, a cargo del Instituto de Estudios y Formación (IDEF), dirigido por el economista Claudio Lozano. En este sentido, la CTA ha venido trabajando desde sus inicios en el armado de un programa social y económico de reformas. Como afirma Martín Armellino, “la primera experiencia de ese tipo fue la conformación del Congreso del Trabajo, la Producción y la Cultura (CTP), a mediados de 1993, bajo el que se realizaron encuentros regionales con la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y Fedecámaras. O también la realización, entre 1998 y 2000, del ‘Encuentro para un Nuevo Pensamiento’, en el que participaron militantes e intelectuales” (Armellino:2005, p. 11). Por ello mismo, la acción de la central se encaminó a desarrollar una serie de propuestas redistributivas, orientadas a la (re) creación de un Estado Social, a partir de la redistribución justa del ingreso y una participación política amplia de todos los sectores

sociales. Es en el marco de una "protesta con propuesta" (Armelino:2005) donde debe situarse también el planteo del Frenapo (Frente Nacional contra la Pobreza), espacio en el cual confluyeron activamente las diferentes líneas internas que componen la CTA (entre ellas, ex frepasistas, ARI, comunistas, peronistas), además de otras organizaciones sociales. Recordemos que, a comienzos de 2000, la CTA elaboró un documento con propuestas para salir de la crisis económica y social, donde planteaba la necesidad de una suerte de ingreso ciudadano, por medio de tres programas principales: subsidio universal a la población menor de 18 años; asignación no contributiva para todas las personas mayores de 65 años que no hubieran logrado cumplir con los requisitos exigidos por el régimen jubilatorio; un seguro de empleo y formación para las jefas y jefes de hogar desocupados. Para ello, la CTA instrumentó junto con otros actores sociales y políticos, nucleados en el Frenapo, una consulta popular que se llevó a cabo entre el 14 y el 17 de diciembre de 2001 y que recogió más de 3 millones de votos por el "sí". Sin embargo, esta primera gran oportunidad por instalar la cuestión se diluyó ante la crisis y apertura de un nuevo escenario, signada por el agravamiento de la situación social y las grandes movilizaciones. Frente a este nuevo escenario, la CTA tuvo problemas para redefinir su intervención, mientras sus premisas eran retomadas parcialmente y distorsionadas por el gobierno peronista, que decidió implementar un programa social masivo para los desocupados: el Plan jefas y jefes de hogar.¹⁴

En fin, nadie podrá negar la importancia que ha tenido la CTA en el proceso de resistencia al modelo neoliberal durante los años 90. Por otro lado, ninguna organización sindical asumió tan temprana y lúcida como la CTA la premisa de que los partidos políticos habían perdido el monopolio de la representación política. De esta premisa surge su propuesta de politizar lo social, y la de construir lo político desde lo social.

Finalmente, la creación del "movimiento social y político" se concretó luego del Encuentro Nacional de la CTA realizado en diciembre de 2002. Sin embargo, este "salto a la política", largamente demorado y esperado por sus militantes, muy probablemente influido por el triunfo del PT (Partido de los Trabajadores) en Brasil, suerte de modelo totalizador, está lejos de

haberse concretado. Más aún, los primeros hechos políticos tras el llamado a conformar un "movimiento social y político" parecen indicar una suerte de diáspora representativa, visible en la proliferación de estrategias políticas individuales, por parte de conocidos referentes de la CTA, realizadas a través y a partir de diferentes estructuras partidarias.

LA EXPERIENCIA DE ACUMULACIÓN DE LA CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA

No podemos terminar este apartado consagrado a la resistencia sindical sin hacer referencia a la experiencia de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), ligada al Partido Comunista Revolucionario (PCR), de tendencia maoísta, nacida al calor de las luchas de los trabajadores del SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales), en Jujuy, bajo el carismático liderazgo de Carlos "Perro" Santillán. La CCC no es una central sindical, sino que se propone como una corriente político-sindical, que trabaja con programa propio en el seno de los distintos gremios y centrales. Esta corriente reivindica la tradición clasista de los años 60 y 70, representada por el dirigente obrero René Salamanca, de SMATA, desaparecido por los militares en marzo de 1976. La CCC desarrolla su acción en un conjunto de organizaciones de primer grado, esto es, sindicatos de base y comisiones internas en fábricas, y ha venido participando activamente en el proceso de recuperación de fábricas quebradas o vaciadas por sus propietarios, antes de 2001, como ha sido el caso en *Renacer* (Tierra del Fuego), y la recuperación —trunca— del Ingenio La Esperanza, en Jujuy.¹⁵

En la actualidad, la CCC cuenta con tres ramas: la sindical, que fue creada en 1994; la de jubilados, inicialmente conducida por Raúl Castells (hasta 2001, cuando se apartó y fundó su propio movimiento); y una tercera, la más masiva, de desocupados, creada en 1998, y dirigida por Juan Carlos Alderete. Pese a que no posee una implantación social en todo el país, la CCC llegó a constituirse en un actor a escala nacional a lo largo de los 90. Esto se debe a su protagonismo en diferentes conflictos regionales, tanto en Jujuy como en el populoso distrito de La

Matanza, donde mostró su capacidad de articulación con otras fuerzas, en especial con sindicatos de la CTA-ATE y con organizaciones de derechos humanos.

Las nuevas organizaciones de base de la CCC se desarrollan y fortalecen en un escenario caracterizado por una larga tradición de protesta y lucha sindical, más aún, de confrontación constante con los poderes provinciales. Este es el caso del SEOM, el sindicato de empleados municipales de Jujuy, liderado por Carlos "Perro" Santillán, cuya historia se remonta a la época del alfonsinismo, época en la cual se formó el Frente de Gremios Estatales, junto con ATE. Durante los 90, Jujuy fue una de las provincias más afectadas en términos de crisis financiera e inestabilidad política: así, entre 1990 y 1994 hubo cinco gobernadores, ninguno de los cuales pudo terminar su mandato constitucional. El Frente de Gremios Estatales, en el cual convergen el SEOM y ATE, lideró el proceso de oposición a la política provincial, protagonizando importantes marchas, muchas de las cuales terminaban en escaramuzas con la policía o en evidentes situaciones de represión. Este escenario de abierta confrontación con el poder provincial debe ser completado con las movilizaciones que encabezaría el sacerdote Jesús Olmedo desde La Quiaca, especialmente entre 1993 y 1994, denunciando la desocupación. En fin, el período más agudo de la protesta en la provincia del Jujuy sería entre 1997 y 1998, cuando se desarrollaron numerosas movilizaciones multisectoriales en localidades cercanas a la capital jujeña, especialmente en Ledesma, San Pedro y Palpalá. Éstas tuvieron su punto álgido a fines de mayo del 97, cuando se produjeron 19 cortes de ruta simultáneos, fenómeno que es conocido con el nombre de "jujeñazo" (M. Rodríguez Blanco: 2002, Santillán:1998).

La otra implantación importante se desarrolla en el distrito más populoso del Conurbano Bonaerense. Allí también la acción de la CCC se nutre de otros antecedentes, relacionados con la lucha por la tierra y la vivienda. Tal es el caso del barrio María Elena, donde reside el dirigente Juan Carlos Alderete, máximo referente de la corriente de desocupados. Entre 1998 y 2001, ésta desarrollaría una estrategia de construcción de poder territorial, basada en la politización de dos temáticas, a saber, la desocupación y el hambre. Durante ese período, la co-

rriente adquirió un protagonismo nacional, junto con la FTV, la organización territorial ligada a la CTA, con la cual llevó a cabo numerosas movilizaciones y largos cortes en la ruta 3, cuyo colorario fue la nacionalización del conflicto piquetero, esto es, el reconocimiento, de parte del gobierno nacional, de las organizaciones de desocupados como un interlocutor político-social importante. Esta asociación estrecha con la FTV llegó a su fin hacia mediados de 2003, época en la cual la CCC se acercó a las organizaciones piqueteras opositoras, con quienes comenzó a coordinar acciones y planes de lucha. En la actualidad, la rama de desocupados de la CCC continúa siendo una de las más numerosas dentro del heterogéneo espacio piquetero.

Por último, en términos ideológicos, la CCC presenta una matriz ambivalente, atravesada por la tensión —siempre irresuelta— entre una visión anticapitalista (que plantea la ruptura revolucionaria, tanto sobre la base de una estrategia insurreccionalista como mediante la construcción de un "doble poder") y el legado nacional-popular (visible en la evocación del "primer peronismo" y las referencias a Eva Perón, así como a un gobierno de "unidad popular").

En fin, una de las notas más sobresalientes de la CCC es su estilo de construcción política, centrado tanto en la masividad como en la difusión de la práctica asamblearia. Esto le permite, más allá de que sus orientaciones políticas generales sean dictadas por el PCR, desarrollar estructuras masivas y participativas de diferente naturaleza (sindical, estudiantil, desocupados, entre otros).

CONFLICTIVIDAD Y NUEVAS EXPRESIONES COLECTIVAS EN EL MUNDO RURAL

En el presente apartado nos interesa resumir, aunque sea de manera esquemática, algunas de las experiencias más relevantes surgidas en el campo de la acción colectiva, en especial, en el sector agrario. Recordemos que el decreto de desregulación económica de 1991 marcó el final de un tipo de relación entre el Estado y el agro argentino. Con este decreto se disolvieron aquellas redes y organismos que regularon las actividades

agropecuarias durante décadas (Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional de Granos, mercados concentradores, entre otros). Estas medidas, que hicieron del sector agropecuario argentino uno de los más desregulados del mundo (Teubal y Rodríguez:2001, p. 74), fueron acompañadas por un discurso modernizador, acerca de la necesidad de la renovación tecnológica. Como anticipamos en el capítulo 2, ello fue la plataforma de grandes cambios en los sistemas de organización y explotación tradicionales que favorecieron la concentración del proceso de producción, afectando, por ende, a pequeños y medianos productores, campesinos y trabajadores rurales.

La introducción de un modelo agrario excluyente estuvo en el origen de diferentes movilizaciones y conflictos, que fueron cobrando visibilidad a partir de 1993, año en el cual se llevó a cabo una importante Marcha Agraria desde distintos puntos del interior del país hasta Plaza de Mayo. En 1994, los sectores del agro, representados por la FAA, liderada por Humberto Volando, participaron también de la Primera Marcha Federal, que nuclearía a gran parte de los sectores opositores al modelo neoliberal.

Sin embargo, desde 1995, la gran novedad del período fue la emergencia de un movimiento agrario iniciado por mujeres. Como ha sido estudiado por Norma Giarracca y su equipo de investigación, (2001), el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML) tiene por protagonistas a mujeres chacareras de varias provincias. Este movimiento arrancó en una pequeña localidad de La Pampa, a partir de una acción espontánea realizada por Lucy de Cornelis (luego presidenta del movimiento), quien en un gesto de desesperación apeló a la radio local para convocar a la población a oponerse al remate de sus tierras. Esta acción espontánea marcó el inicio de un movimiento que rápidamente se extendería a diferentes provincias del país (Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Formosa, Córdoba), donde se llevaron a cabo distintas acciones para impedir el remate de las tierras endeudadas.

Recordemos que el nuevo modelo agrario trajo aparejada una fuerte exigencia de modernización en el agro, lo cual generó una tendencia al endeudamiento en pequeños y medianos productores. Finalmente, la deuda terminó por convertirse en

una pesada carga, a la luz de las altas tasas de interés y de la caída de los precios internacionales de los productos agrícolas, y muchos productores vieron amenazada su propiedad. A esto hay que agregar que no pocos de los propietarios endeudados creyeron y aceptaron este discurso "modernizador" que propiciaba el gobierno, como fue el caso de las "pioneras" del MML (Giarracca:2001).

Como ya había sucedido en los 70 con las organizaciones de derechos humanos, como ocurriría luego con las organizaciones de desocupados, las mujeres se encontraron en mejores condiciones que los hombres para redefinir la situación en medio de la crisis. Así, en una primera etapa las demandas del MML se centraron en el pedido de suspensión de los embargos y/o ejecución de chacras endeudadas, el congelamiento de los juicios en trámite y el análisis de la legitimidad de las deudas (Bidaseca y Mariotti:2001). Poco después, el proceso de politización llevaría a alguna de estas mujeres a realizar un cuestionamiento mayor de la política neoliberal del gobierno, más allá de los reclamos sectoriales, respecto de la política agropecuaria. La politización del movimiento estuvo ligada sin duda a las distintas acciones e instancias de articulación que el MML inició con organizaciones afines a la problemática de la tierra, tanto en el interior del campo militante (por ejemplo, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase) como en el exterior, a través de las relaciones que entabló con Los Sin Tierra en Brasil y el Barzón en México (Giarracca:2001). Sin embargo, el MML es un movimiento heterogéneo según las provincias y los estilos de liderazgo, como lo muestra el movimiento de Olavarría, que defiende los valores de la tierra desde una óptica tradicionalista (Piriz, Ringuet y Valerio:1999). Por último, hay que subrayar las particularidades del caso, pues se trata de la movilización de un sector históricamente asociado al mundo masculino. En este sentido, la irrupción de un protagonismo femenino en el marco de las luchas agrarias no dejaría de generar tensiones de género, sobre todo con la tradicional y masculina FAA, más allá de las coincidencias propias del espacio militante.

También las comunidades indígenas y campesinas protagonizaron luchas rurales. La implementación de una política que favorecía claramente la concentración de la producción agravó

la presión de los grandes propietarios sobre las comunidades indígenas (las que, por lo general, no cuentan con los títulos de propiedad), así como sobre pequeños propietarios.

Recordemos que, como hemos mencionado en el capítulo 3, en nuestro país se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a vivir en las tierras ocupadas por sus antepasados y a desplegar sus prácticas culturales y modos de vida (derecho veintañal). Así lo estipulan la Ley Indígena 23.302, el artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional y todos los tratados y convenios internacionales de rango constitucional, como el 169 de la OIT. Pese a ello, las demandas de los indígenas están lejos de haber sido satisfechas y las comunidades padecen aún la incertidumbre sobre la entrega de títulos (GER:2004, Alerta Argentina:2004). Entre las numerosas expresiones que hoy existen en el seno del mundo indígena, podemos mencionar el Consejo Asesor Indígena (CAI), en la provincia de Río Negro. Surgido en 1988 —cuando la legislación provincial aprobó la Ley Integral del Indígena, que incorporaba en el artículo 6 su reconocimiento—, durante los 90, el CAI fue algo más que un ente dependiente del Estado provincial: impulsó y participó activamente en acciones puntuales por la defensa de pobladores que se encuentran con problemas legales por la propiedad de la tierra (Gutiérrez:2001).

En fin, dentro del espacio de las organizaciones que se reivindican como campesinas, uno de los ejemplos más relevantes es el Mocase, que surgió de un conjunto de asociaciones de pequeños productores a mediados de los 80. Actualmente el Mocase es una de las organizaciones campesinas más afirmadas del país y con mayores vínculos en el campo de las redes globales (por ejemplo, Vía Campesina) y de los movimientos sociales en la Argentina (en especial, con organizaciones de desocupados). Estos reclaman al Estado, entre otras cosas, una política que permita la comercialización de sus productos y una mayor distribución de la tierra (GER:2001). Durante los 90, se destaca también el surgimiento de otras organizaciones de pequeños productores, entre ellas el Movimiento Campesino de Formosa (Mocafor)¹⁶ y el Movimiento Agrario Misionero (MAM).

En los últimos años, las dificultades que deben afrontar estas organizaciones se han multiplicado. Además de los pro-

blemas derivados de la contaminación con agrotóxicos y la destrucción de puestos de trabajo en el agro, en las áreas marginales los campesinos enfrentan una política de cercamiento de campos, por parte de los grandes productores. En efecto, como coinciden distintos analistas y organismos de derechos humanos, la expansión de los cultivos de soja transgénica en las llamadas áreas marginales se halla en el origen de una política de “desplazamientos voluntarios” y, más aún, de desalojos violentos de campesinos e indígenas, llevados a cabo por guardias privadas, con la complicidad de diferentes instancias del poder (local, provincial). Un ejemplo de ello es que servicios de seguridad privada contratados por grupos latifundistas persiguen y hostigan constantemente a campesinos del Mocase (Alerta Argentina:2004). Otra de las amenazas que penden sobre estas organizaciones es la probable constitución y entrada del país en el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que, bajo la égida de Estados Unidos, los insertaría en una situación de asimetría mayor, amenazando directamente su supervivencia.

NUEVAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Hemos dicho que los indultos produjeron un hondo impacto en las organizaciones de derechos humanos, cuyo grado de heterogeneidad y fragmentación se había hecho más visible durante los últimos años del gobierno de Alfonsín. Siguiendo a Sebastián Pereyra (2005), podemos afirmar que durante los 90, luego de los indultos concedidos por el gobierno de Menem a los militares que habían participado de la represión ilegal, el problema de los derechos humanos encontró tres reformulaciones importantes. En primer lugar, dentro de las organizaciones históricas se abrió una discusión sobre el carácter de la democracia y el incumplimiento de sus promesas (no sólo con respecto a la violación de los derechos humanos, sino relativas al carácter excluyente que asumía el modelo económico), lo cual fue instalando una brecha cada vez mayor entre un ala maximalista y las corrientes más institucionalizadas. En segundo lugar, se produjo “el desplazamiento hacia la búsqueda de una condena social y hacia la profundiza-

ción de la reconstrucción de la memoria colectiva acerca del significado y las consecuencias del terrorismo de Estado" (Pereyra:2005). De esta manera, la falta de condena judicial no hizo sino acentuar la necesidad de profundizar la disputa en el terreno cultural. La emergencia de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), en 1995, aparece claramente ligada a la lucha contra el olvido social y la impunidad concedida por el Estado. En tercer lugar, el último eje de reformulación se centró en la crítica y denuncia del funcionamiento de las instituciones policiales dentro del sistema democrático. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se fueron orientando hacia esta temática, así como surgieron otras de nuevo tipo, entre ellas la Comisión de Familiares de Víctimas de la Violencia Institucional (Cofavi), y sobre todo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), esta última centrada en los casos de "gatillo fácil".

En realidad, durante los 90 aumentan las demandas en torno a la defensa de los derechos individuales, a partir de los casos de violencia institucional y policial. Entre los primeros hechos de gran repercusión pública está la masacre de Ingeniero Budge (1987), la muerte de Walter Bulacio, ocurrida en dependencias policiales, a la salida de un recital (1991), y el asesinato de Miguel Bru (1993). Otros casos paradigmáticos son los crímenes del soldado Omar Carrasco en Zapala (1994), de Sebastián Bordón (Mendoza, 1997) y del fotógrafo José Luis Cabezas (1996). El crimen de María Soledad, ocurrido en Catamarca en 1993, dio origen a nuevas formas de protesta (las "marchas de silencio") que desafiaron a los poderes feudales de las provincias. Finalmente, los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Israelita de la Argentina (AMIA), los más importantes de la historia argentina, con más de un centenar de muertos, cuyos familiares se han constituido en demandantes de justicia, al conformar una organización, "Memoria Activa".

Las demandas de justicia de los movimientos cívicos no asumen una forma programática que pueda ser fácilmente traducible a doctrinas o tradiciones partidarias previas (Landi y González Bombal:1995). Pero todas estas organizaciones, que surgieron de casos particulares, reflejan una situación de impunidad. Por ende, la tematización de la impunidad emergió

como el marco común que fue nucleando las diferentes demandas de justicia, aun si ésta va alternando o actuando junto con un reclamo ligado a la inseguridad (Pereyra: 2005).

Por último, en el campo de las organizaciones de derechos humanos, se destaca el nacimiento de H.I.J.O.S., cuyo carácter innovador tendrá un fuerte impacto en el conjunto del espacio militante. Como hemos dicho, la agrupación surge en 1995, en un escenario que confirma la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar. Sin embargo, 1995 es también el año en el cual se registran las confesiones del capitán Adolfo Scilingo, publicadas en el libro *El vuelo*, del periodista Horacio Vertbisky, que sacudieron la sociedad argentina.¹⁷

La agrupación H.I.J.O.S. está compuesta casi exclusivamente por jóvenes de entre 20 y 25 años, procedentes de las clases medias. Su discurso se centra en la articulación de varios temas, entre otros el lazo entre las luchas sociales de los años 70 y las luchas actuales, así como en la continuidad del aparato represivo, ilustrada por los numerosos casos de violencia policial ejercidos contra los jóvenes (Bonaldi:2004). A partir de 1997, la agrupación cobraría notoriedad con la introducción de un nuevo formato de protesta, cuyo carácter espectacular y fuertemente expresivo no pasará inadvertido en la sociedad: los "escraches". Bajo la consigna "Si no hay justicia, hay escrache", la agrupación H.I.J.O.S. —acompañada por grupos de arte político—, orientará la acción colectiva, ya no hacia el Estado (que asegura la impunidad), sino hacia los responsables de la represión, con el fin de lograr la condena social. En efecto, en una suerte de ritual burlesco, a la vez teatral y musical, el "escrache" denuncia al criminal en su propio domicilio o en su lugar de trabajo, para ponerlo en evidencia ante el conjunto de la sociedad.

Otro de los aspectos novedosos que presenta H.I.J.O.S. es el formato organizativo que asumen. No sólo se caracterizan por la acción directa, sino por introducir un estilo de construcción colectiva más bien flexible y horizontal y un sistema de toma de decisiones centrado en la búsqueda del consenso. En este sentido, como ha sido señalado oportunamente por numerosos analistas (Inzúa:2001, Bonaldi:2004, Zibecchi:2003), la agrupación H.I.J.O.S. da cuenta del surgimiento de un nuevo patrón de

organización colectiva. En los años siguientes, este formato organizativo y expresivo se convertiría en una suerte de marco común en el seno de pequeñas y medianas organizaciones o de colectivos militantes, tanto en el interior del espacio piquetero (los Movimientos de Trabajadores de Desocupados), como sobre todo de los numerosos colectivos culturales, que se difundieron desde 2001-2002. En fin, H.I.J.O.S. aparece como la bisagra entre las organizaciones existentes y aquellas que asomarán, a partir de 1997-1998, sobre todo en el escenario del Conurbano Bonaerense. Marcados por pertenencias diversas y dobles militancias, los integrantes de H.I.J.O.S. anuncian la emergencia de un nuevo *ethos* militante, en el cual convergen el talante antirrepresivo, la acción directa y la búsqueda de organizaciones más flexibles, basadas en la democracia por consenso.

* * *

Como consta en el epígrafe de este capítulo, las declinaciones del sindicalismo peronista desempeñaron un rol instrumental en la implementación de las reformas neoliberales en la Argentina, "mostrando que los sindicatos no sólo movilizan sino que también desmovilizan y que, en ausencia de su colaboración, las tareas de la transformación económica son potencialmente más arduas" (Torre:1998, p. 85). Tanto es así, que muy probablemente la disociación entre la dirigencia de los grandes sindicatos nucleados en la CGT y las movilizaciones sociales no encuentre parangón con ningún otro período de nuestra historia. Nos referimos al ciclo de acciones que arranca en 1989 y tiene por protagonistas a los empleados públicos, los docentes y los jubilados, todos ellos actores sociales perjudicados por la política de ajuste estructural, cuyos planes de lucha se realizaron por fuera de la CGT.

Cierto es que los cambios de orientación del gobierno peronista obligaron a los sindicatos a redefinir sus relaciones con lo político. Pero además la realidad misma del sindicalismo sufrió grandes mutaciones, a partir de las transformaciones laborales y la entrada acelerada en una era de flexibilización y desempleo. Hemos ilustrado las consecuencias de este conjunto de transformaciones en el caso de la UOM, hasta

hace poco tiempo considerada como la encarnación más acabada del poder sindical.

La constitución de un núcleo sindical antineoliberal, distanciado del tradicional sindicalismo peronista, y la creación de multisectoriales serán algunos de los grandes desafíos que asumirán tanto la CTA como la CCC. Sin embargo, durante el período, los conflictos tendieron a manifestarse en el nivel local y regional, con escasa articulación entre ellos, como consecuencia de la descentralización administrativa, que abrió un espacio entre la política nacional y la política provincial.

Además de las acciones desarrolladas por los sindicatos, el período da cuenta de la emergencia de nuevas formas de acción no institucional y organizaciones, ligadas a una matriz territorial, como aparece ilustrado por las Mujeres Agropecuarias en Lucha, diferentes agrupamientos campesinos (Mocase, Mocafor) y las comunidades indígenas (CAI). Otra de las características novedosas es el surgimiento de nuevas asociaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos, frente a los casos de violencia institucional. Por último, el reconocimiento público de lo ocurrido durante la dictadura por parte de algunos militares, sumado a la aparición de nuevos actores (H.I.J.O.S.) con su propio repertorio de protestas (los "escraches"), contribuyó a (re)colocar el tema de los derechos humanos entre los asuntos de interés público.

En fin, todo da cuenta de la conformación de un vasto arco antineoliberal, en el cual se va situando un conglomerado heterogéneo de organizaciones sociales, cuya visibilidad y capacidad de articulación en el nivel nacional fue muy difícil, pese a la intensidad de las luchas.